

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 8º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-39771-2018
CARATULADO : VÁSQUEZ/FISCO DE CHILE, CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO/ MINISTERIO DEL DEPORTE

Santiago, veintiséis de Febrero de dos mil veinte .-

VISTOS:

Al folio 1, comparecen don Rolando Arturo Vásquez Godoy, jubilado, domiciliado en calle José Bisquert 2474, población Nueva Esmeralda, comuna de Independencia, Santiago; doña Liliana Nancy Vásquez Godoy, dueña de casa, domiciliada en pasaje Los Cisnes 525, Villa Los Pajaritos, comuna de Pudahuel, Santiago; doña Gloria Angélica Vásquez Godoy, pensionada, misma dirección anterior; don Roberto Claudio Vásquez Godoy, técnico electricista, domiciliado en Avenida Parque Central Oriente 690, Villa Jardín del Norte, comuna de Quilicura; don Miguel Ángel Vásquez Godoy, funcionario del Servicio de Registro Civil e Identificación, domiciliado en calle Navarrete y López 1826, Población Vivaceta, comuna de Independencia; y don Luis Vásquez Ronce, jubilado, domiciliado en pasaje Haití 4115, comuna de Independencia, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios por crimen de lesa humanidad en contra del Fisco De Chile, representado legalmente por doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada, domiciliada para estos efectos en Agustinas 1687, comuna y ciudad de Santiago.

Fundan su acción en los delitos cometidos en contra de don Ernesto Vásquez Godoy, hermano de los demandantes, indicando que fue detenido el día 19 de septiembre de 1973, en la empresa donde trabajaba, “Airolite” por personal de carabineros de la Quinta Comisaría de Conchalí, siendo ejecutado el mismo día de su detención, a las 18:30 horas, por 16 impactos de bala y evidentes muestras de torturas, tales como, la mandíbula quebrada, brazos quebrados y quemaduras en el cuerpo, apreciadas al momento de efectuar el reconocimiento en la morgue.

Relatan que paralelamente, la casa familiar fue allanada por carabineros del Retén "Villa Moderna", enterándose por un compañero de trabajo que su hermano había sido detenido, sin entregar mayor información, concurriendo sus familiares al día siguiente de la detención, a la Quinta Comisaría a preguntar por él, indicando la guardia que no se encontraba ninguna persona con ese nombre, enviándolos al estadio nacional, puesto que podía darse que



estuviera allá, sin embargo, al consultársele después a un carabinero conocido, este señaló que se había encontrado un cadáver en una de las celdas con las mismas características físicas y de vestuario de la víctima, sin dar más información por resguardo, por lo que de esta forma, se concurrió a distintos lugares de detención sin obtener resultado, pasando incluso diariamente por la morgue sin que apareciera, hasta que el día 26 de septiembre no de los hermanos, pasó por un muro, donde figuraba “Ernesto Godoy Vásquez”, siendo posteriormente reconocido por su padre y un hermano al momento de retirar su cuerpo.

Hacen presente que, al momento del golpe militar, la empresa Airolite se encontraba intervenida y tomada por los trabajadores, teniendo su hermano una activa participación en todo este proceso, siendo el ayudante y persona de confianza del interventor, junto con ser delegado del sindicato de la empresa, siendo por este motivo detenido, realizándose lo anterior como parte de una venganza y represalia por el hecho de que los trabajadores estaban pidiendo al gobierno de entonces la estatización de la empresa, lo cual, según se ha relatado, fue castigado con detención y tortura para algunos, y muerte para otros, generando estos hechos, una sensación de pesar y desesperación al no saber el paradero de su hermano, teniendo que soportar una de las semanas más terrible de sus vidas, para posteriormente enterarse de su fallecimiento, causándoles una aflicción que hasta el día de hoy se mantiene. Producto de lo mismo, todos han sufrido, y siguen sufriendo depresión, lo que se ha visto exacerbado ante la dictación de la sentencia de sobreseimiento de fecha 05 de septiembre de 2018, por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Mario Carroza Espinosa, en la causa Rol Ingreso Corte N° 1567-2016, en la cual se plasma que no obstante no haber sido posible hasta ahora individualizar a persona determinada a quien pueda atribuírsele participación precisa en los hechos materia de la presente investigación, de los antecedentes allegados al proceso se puede establecer la existencia de los hechos ilícitos que en la presente demanda se relatan y que sirven de fundamento a la pretensión que por la misma se hace valer.

Exponen que los hechos señalados han de ser reparados siendo menester establecer correctamente la responsabilidad del Estado, haciendo una revisión de las diversas normas constitucionales y legales que generan esta responsabilidad del Estado y la consecuente obligación de reparar a quienes han sido víctima de daños causados por este como sucede en el presente caso, indicando en primer término que “el Estado está al servicio de la persona humana”, según lo prescribe, el artículo 1° de la Constitución Política de la República, en su inciso 4, teniendo un lugar preferencial, que obliga a que las actuaciones del Estado vayan en su beneficio, debiendo también atender lo que establece el artículo 5 inciso 2, el cual obliga al Estado a la promoción y



respeto de los Derechos Fundamentales, encontrando dentro de estos derechos que “emanan de su naturaleza de tal”, debemos destacar el propio derecho a la vida que nuestro artículo 19 N°1 de la Constitución Política consagra, la cual según Cea Egaña: “es el supuesto base y finalidad de todos los demás derechos sin excepción”.

Explican que estas obligaciones son propias de un Estado Democrático de Derecho, lo cual se consagra en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, normas que no solo consagran que los gobernantes, se encuentran sujetos a distintos controles y son responsables, por tanto, de sus acciones y de sus omisiones en el ejercicio de sus facultades, por ello, el artículo 6 obliga a los órganos del Estado a someter su acción a la Constitución y a las leyes dictadas conforme a ella y, por su parte, el artículo 7 refuerza la idea de que los órganos del Estado “deben actuar dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley.” En este mismo sentido, es central tener a la luz el artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República que consagra una de las acciones constitucionales para poder hacer la responsabilidad del Estado en razón del daño causado, estableciendo un mecanismo de reparación de los daños producidos por la Administración a los particulares, reforzado lo anterior, por el artículo 4 de la ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, señala que “el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”, añadiendo que la responsabilidad del Estado es de Derecho Público y que por lo tanto, se excluye la aplicación de las normas civiles a los casos en que se hace efectiva la responsabilidad del Estado y, en este sentido, no se aplicarían los plazos de prescripción establecidos por el Código Civil para el presente caso, citando al efecto vasta doctrina y jurisprudencia al efecto.

Evidencian la necesidad de una reparación integral del daño moral causado, ya que el Estado de Chile no cumplió su función como garante y protector de la vida humana y de los distintos derechos que emanan de ella, sino que, muy por el contrario, fueron los propios miembros de la Administración del Estado quienes ejercieron y ejecutaron los actos lesivos, que nos causaron tanto daño, señalando que la extensión del derecho a la reparación integral también se encuentra consagrada en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, agregando que la jurisprudencia más reciente de la Excelentísima Corte Suprema confirma todos los argumentos ya vertidos sobre la reparación integral, siendo este derecho reconocido ampliamente por el Derecho Internacional y deriva del bloque constitucional chileno de Derechos Humanos, que obliga al Estado a



reparar la lesión al no poder volver la situación al estado anterior a la vulneración de aquellos derechos.

Por otra parte, postulan la imprescriptibilidad de la acción para obtener reparación de perjuicios por la comisión de delitos de lesa humanidad, exponiendo que la más reciente jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia, ha consagrado de forma sistemática en sus fallos más recientes la imposibilidad de aplicar la prescripción en la acción civil propia de crímenes de lesa humanidad, no resultando aplicables las disposiciones del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como resuelve el fallo, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional, en cuanto a la ineficacia de normas internas que hagan ilusorio el derecho a la reparación de los daños ocasionados por crímenes de lesa humanidad y en este sentido, indican que, pese a que la prescripción es considerada una institución general del derecho, no debería operar respecto de todas las acciones destinadas a obtener indemnización, sin considerar o distinguir la naturaleza de la causa que da origen a dicha acción.

En mérito de lo expuesto y previa cita de las disposiciones legales pertinentes, solicitan tener por interpuesta demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco De Chile, y en definitiva declarar:

1. Que se condene al FISCO DE CHILE a pagar la suma de \$540.000.000 a don Rolando Arturo Vásquez Godoy, a doña Liliana Nancy Vásquez Godoy, a doña Gloria Angélica Vásquez Godoy, a don Roberto Claudio Vásquez Godoy, a don Miguel Ángel Vásquez Godoy, y a don Luis Vásquez Ponce, por los perjuicios morales que sufrido producto del asesinato de Ernesto Vásquez Godoy en el mes de septiembre de 1973 en un recinto policial de carabineros, o en subsidio, el monto que considere ajustado a derecho, justicia y equidad, conforme al mérito de autos.

2. Que el Estado de Chile deba pedir disculpas públicas por los perjuicios morales que se nos han causado, por algún medio de difusión social, sea escrito u electrónico, o por el medio que sea determinado por esta Juez conforme al mérito de autos.

3. Que en todo evento se condene al demandado al pago de las costas de esta causa.

Al folio 8 doña Ruth Israel López, por el Fisco de Chile contestando la demanda de autos, opone excepción de reparación Satisfactiva e improcedencia de la indemnización alegada por el demandante don Luís Vásquez Ponce (padre) por haber sido ya indemnizado, identificando las prestaciones en dinero y otros medios de compensación dirigidos a la



reparación integral de las víctimas; agrega las reparaciones que, conforme a las leyes nacionales de reparación del Estado de Chile, han obtenido los demandantes, incluyendo beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos y otras medidas análogas diversas a la entrega de una cantidad de dinero, así como también transferencias directas en dinero.

Repara en la complejidad reparatoria, expresando que en lo que respecta a justicia transicional fueron 3 objetivos a que se abocó entonces el Presidente Patricio Aylwin: (a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse. Añade que orientada al segundo objetivo, la Comisión Verdad y Reconciliación, en su informe final propuso una serie de propuestas de reparación, entre ellas una pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas y algunas prestaciones de salud. El referido informe sirvió de causa y justificación al proyecto que derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Observa que durante el proceso de formación de esta ley se tuvo presente en todo momento que su objetivo era reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas, haciendo referencia a diversas expresiones en tal sentido, promoviéndose, según indica la demandada, la reparación del daño moral de las víctimas.

En este punto, establece 3 tipos de compensaciones: (a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; (b) Reparaciones mediante la asignación de nuevos derechos, y (c) reparaciones simbólicas. Se limita en primer lugar a desglosar los montos desembolsados por el Estado de Chile, entrega además, un listado con las reparaciones específicas, señalando que a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727, mediante pensiones y otras indemnizaciones, por ejemplo y en primer lugar, de conformidad al artículo 23 de la Ley 19.123, se entregó a los familiares de las víctimas una bonificación compensatoria de un monto único equivalente a doce meses de pensión. Para el caso que se solicite hoy, por ejemplo, esa compensación equivaldría a \$ 2.520.000; en la misma línea, la Ley 19.980 otorgó, por una sola vez, un bono de reparación de \$10.000.000, para los hijos del causante que nunca recibieron la pensión mensual de reparación, y por la diferencia que corresponda para aquellos que la recibieron pero han dejado de percibirla; finalmente, los hijos de los causantes que se encuentren cursando estudios media jornada tendrán derecho a un subsidio mensual equivalente a 1.4 UTM, esto es, al día de hoy \$67.694. Igualmente entrega un listado de actos simbólicos destinados a la reparación de los daños



morales de las víctimas, exponiendo que la ley 19.123 ha incorporado en el patrimonio de los familiares de las víctimas de DDHH los siguientes derechos:

a) Todos los familiares del causante tendrán el derecho de recibir de manera gratuita las prestaciones médicas incluidas en el Régimen General de Garantías en Salud y las derivadas de embarazos. En general este tipo de beneficios han sido agrupados en el denominado Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS). Ciertamente, dicho programa es parte de una Política Pública de Reparación asumida por el Estado de Chile con las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos en el periodo de septiembre de 1973 a marzo de 1990, según se dispone en las leyes 19.123, 19.980, 19.992 y 20.405. En este sentido, las personas acreditadas como beneficiarias del Programa, tiene derecho a la gratuidad de las prestaciones médicas que se otorgan en todos los establecimientos de salud de la red asistencial pública, independiente de la previsión social que sostengan, accediendo a toda la oferta de atención de salud que otorga el sector. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS15 en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios. A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2014, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$4.580.892. Este presupuesto se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992.- Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos equivalentes para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos.

b) Los hijos de los causantes que sean alumnos de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, sin aporte fiscal, y reconocidos por el Ministerio de Educación, tendrán un derecho al pago de la matrícula y del total del arancel mensual de cada establecimiento. Esta beca se



encuentra normada por la Ley N° 19.123 y está destinada a los hijos de las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, de acuerdo a lo establecido por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, hasta los 35 años de edad. En cuanto a la duración del beneficio, tratándose de aquellas carreras con una duración inferior a 5 semestres, el beneficio cubrirá hasta un semestre adicional. Para aquellas carreras con una duración igual o superior a 5 semestres, el beneficio cubrirá hasta dos semestres adicionales. Asimismo, dichos beneficios podrán extenderse hasta por un año, inmediatamente posterior al egreso de los estudios de nivel superior, cuando se requiera rendir un Examen de Grado o Licenciatura, o presentar una Memoria para su aprobación, siendo éste beneficio complementario a la extensión semestral de los beneficios educacionales.

Concluye señalando este tipo de beneficios cabe hacer presente que ellos fueron pensados como una forma de compensación precisamente por los gastos que la persona ausente habría soportado de no haberse producido el hecho ilícito. Así lo señalaron, por lo demás, los propios representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y que existe identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.

Por otra parte, opone excepción de improcedencia de la indemnización, por haber sido preteridos legalmente los demandantes por el delito de homicidio de su hermano don Ernesto Vásquez Godoy, indicando que la Ley 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público, y esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos, mediante compensaciones económicas razonables, que resultan coherentes con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares, acotando que, para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal, que optó beneficiar al núcleo familiar más cercano; esto es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral, teniendo como límite los escasos recursos, siendo el caso de los demandantes de autos, que fueron preteridos por la ley como beneficiarios de una asignación en dinero por el



daño que invocan, sin que ello implique afirmar que no hayan obtenido una reparación satisfactiva por otra vía, siendo improcedente la indemnización reclamada por cuanto el sistema legal de reparación pecuniaria excluyó a los hermanos de los causantes.

Sin perjuicio de lo anterior, alega que los actores preteridos han obtenido reparación satisfactiva por el daño sufrido, explicando que tratándose en la especie de un daño extrapatrimonial, su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto netamente económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, como aconteció en el caso de autos, y que se traduce en la compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Estos programas, incluyen beneficios de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero, pudiendo indicarse que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se concretó también de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones y que permitieran recuperar el honor, dignidad y buen nombre, proporcionando al efecto un listado de aquellas, exponiendo que de ser efectivo que los demandantes pudieran no percibir una reparación expresada mediante pagos en dinero, en tal caso, las políticas de reparación asumidas por el Estado por violación a los derechos humanos, entre las cuales están las reparaciones simbólicas ya referidas, los programas de beneficios educacionales y el denominado Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), significan también reparación a los familiares de víctimas de derechos humanos.

Opone, además, excepción de prescripción extintiva, conforme a las reglas del artículo 2332 del código Civil en relación a lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo cuerpo, ya que conforme al relato de los actores, el homicidio de la víctima de este proceso ocurrió el 19 de septiembre de 1973, y ante el entendido que estas acciones no pudieron ser ejercidas, sino hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de esta demanda, esto es, el día el 8 de diciembre de 2018, han transcurrido en exceso el plazo de 4 años establecido en el artículo 2332, mencionado, debiendo acogerse la excepción de prescripción y rechazarse la acción indemnizatoria deducida.

En subsidio alega la prescripción ordinaria de 5 años, en relación a lo dispuesto por los artículos 2515 y 2514 del Código Civil, por cuanto señala que la imprescriptibilidad es excepcional, reforzando esta idea cita jurisprudencia que reza, “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad”. Indica que es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden



público en base a lo dispuesto por el artículo 2497 del Código Civil, explicando que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tiene la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado. Señala además que el fundamento mismo de la prescripción sigue un bien jurídico superior que se pretende alcanzar consistente en la certeza de las relaciones jurídicas. Cita, al efecto, sentencia de unificación de jurisprudencia de 21 de enero de 2013, de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, que establece que el principio general que debe regir en la materia es el de la prescriptibilidad de la acción civil, que los tratados internacionales relacionados con la materia no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; añade que la imprescriptibilidad que alguno de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal; que del mismo fallo se desprende que no existiendo una norma especial que determine el plazo de prescripción que debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, finalmente, alude a la sentencia para señalar que el plazo debe contarse, no desde la desaparición o detención del demandante, sino desde que el titular de la acción indemnizatoria tuvo conocimiento y conto con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia, solicitando a esta juez rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, cuestiona la fijación la indemnización por daño moral por el monto pretendido, sosteniendo que en términos generales la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para situarla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Continúa, señalando que el daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante un valor que sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva, no pudiendo considerarse, además, la capacidad económica del demandante y/o demandado para fijar o determinar dicho monto, el que resulta de todas formas excesivo.

En subsidio, de las excepciones precedentes de prescripción y reparación integral del daño, alega que la fijación del daño moral debe considerar todos los pagos recibidos ya recibidos del Estado conforme a las leyes de reparación y que seguirá percibiendo a título de pensión, como también los beneficios extramatrimoniales.

Finalmente, sostiene la improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada, considerando que los reajustes sólo pueden devengarse



en el caso de que la sentencia acoja la demanda y establezca dicha obligación y además, solo una vez, que aquella se encuentre firme y ejecutoriada.

En consideración a lo expuesto solicita tener por contestada demanda civil y en definitiva, conforme a s excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar la acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas, o en subsidio, fijar el monto de la indemnización, teniendo presente y descontando lo ya percibido a través de las leyes de reparación.

Al folio 18, se tuvo por evacuada la réplica del demandante en rebeldía.

Al folio 19, el demandado Fiscal evacuó el trámite de dúplica, reiterando las alegaciones, excepciones y defensas de la contestación de la demanda.

Al folio 23, se recibió la causa a prueba en autos.

A folio 55, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en esta sede civil, Rolando Arturo Vásquez Godoy, Liliana Nancy Vásquez Godoy, Gloria Angélica Vásquez Godoy, Roberto Claudio Vásquez Godoy, Miguel Ángel Vásquez Godoy y Luis Vásquez Ponce, los primeros hermanos y el último padre de Ernesto Vásquez Godoy, dedujeron demanda de indemnización de perjuicios por crimen de lesa humanidad en contra del Fisco De Chile, fundado en el homicidio de que fue víctima, con ocasión de su detención por parte de Carabineros de Chile el día 19 de septiembre de 1973.

Basaron su demanda en los hechos ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que doña Ruth Israel López, abogada procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, contesta demanda sobre indemnización de perjuicios, solicitando su total rechazo, alegando la excepción de reparación Satisfactiva e improcedencia de la indemnización alegada por el demandante don Luís Vásquez Ponce por haber sido ya indemnizado, identificando las prestaciones en dinero y otros medios de compensación dirigidos a la reparación integral de las víctimas; agregando las reparaciones que han obtenido los demandantes, incluyendo beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos y otras medidas análogas diversas a la entrega de una cantidad de dinero, así como también transferencias directas en dinero, de conformidad al artículo 23 de la Ley 19.123, el que entregó a los familiares de las víctimas una bonificación compensatoria de un monto único equivalente a doce meses de pensión, en la



misma línea, la Ley 19.980 otorgó, por una sola vez, un bono de reparación de \$10.000.000, para los hijos del causante que nunca recibieron la pensión mensual de reparación, y por la diferencia que corresponda para aquellos que la recibieron pero han dejado de percibirla; finalmente, los beneficios educacionales para los hijos de los causantes que se encuentren cursando estudios media jornada, proporcionando igualmente un listado de actos simbólicos destinados a la reparación de los daños morales de las víctimas, exponiendo que la ley 19.123 ha incorporado en el patrimonio de los familiares de las víctimas derecho de recibir de manera gratuita las prestaciones médicas incluidas en el Régimen General de Garantías en Salud y las derivadas de embarazos y derechos para los hijos de los causantes que sean alumnos de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, sin aporte fiscal, y reconocidos por el Ministerio de Educación, quienes tendrán un derecho al pago de la matrícula y del total del arancel mensual de cada establecimiento.

Opone excepción de improcedencia de la indemnización, por haber sido preteridos legalmente los demandantes por el delito de homicidio de su hermano don Ernesto Vásquez Godoy, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, siendo improcedente la indemnización reclamada por cuanto el sistema legal de reparación pecuniaria excluyó a los hermanos de los causantes.

Asimismo opone la excepción de prescripción extintiva de las acciones civiles, todo ello de acuerdo a las normas y jurisprudencia que cita y que ya fueron señaladas en la parte expositiva de este fallo.

Cuestiona, por otra parte, la fijación de la indemnización por daño moral por el monto pretendido, sosteniendo que en términos generales la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para situarla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso, no pudiendo considerarse, además, la capacidad económica del demandante y/o demandado para fijar o determinar dicho monto, el que resulta de todas formas excesivo.

En subsidio, de las excepciones precedentes de prescripción y reparación integral del daño, alega que la fijación del daño moral debe considerar todos los pagos recibidos ya recibidos del Estado conforme a las leyes de reparación y que seguirá percibiendo a título de pensión, como también los beneficios extramatrimoniales.

TERCERO: Que para acreditar sus afirmaciones, el demandante allegó a este Tribunal prueba documental, no objetada de contrario consiste en:



Al anexo de folio 1:

1. Copia de Querella criminal presentada por los demandantes con fecha 18 de octubre de 2017, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, fundada en los hechos relatados en autos.

2. Copia de sentencia de 5 de septiembre de 2018, pronunciada por el Ministro en Visita Mario Carroza Espinosa, Rol de Corte N° 1567-2016, que sobreseyó temporalmente la causa por no haber indicios suficientes para acusar a determinada persona como autor, cómplice o encubridor.

Al anexo de folio 12:

3. Certificados de nacimiento de don Ernesto Vásquez Godoy, don Luis Vásquez Ponce, don Roberto Vásquez Godoy, doña Liliana Vásquez Godoy, doña Gloria Vásquez Godoy, don Rolando Vásquez Godoy y de don Miguel Vásquez Godoy, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Al anexo de folio 37:

4. Copia de protocolo de autopsia N°2830-73, emitido por el Servicio Médico Legal, remitido por ordinario N° 1141, al Ministro en Visita extraordinaria de la Ilustre Corte de Apelaciones Mario Carroza Espinosa, al que se adjunta certificado de defunción, acta de recepción de cadáveres, informe de autopsia.

5. Extracto publicado en la página web oficial del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en el que consta un breve relato de lo sucedido en la empresa Airolite S.A y en el cual Ernesto Vásquez Godoy, es señalado como víctima fatal producto de su ejecución en manos de agentes del estado junto a otros compañeros de trabajo.

CUARTO: Que, por su parte la defensa Fiscal, acompañó al anexo de folio 14, Oficio 57574/2019 del Jefe del Departamento de Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, de 14 de febrero de 2019, que informa de los beneficios recibidos por doña Gladys Godoy Vergara, N° 2.744.310-9, en su calidad de madre del causante Rettig don Ernesto Vásquez Godoy, adjuntando cuadro que señala que la beneficiaria ha recibido por el periodo comprendido entre Julio de 1991 a Enero de 2019, un monto de pensión total pagada de \$97.974.512; aguinaldo por \$618.152 y una pensión actual por \$518.559.-

QUINTO: Que, para una idónea exposición del asunto controvertido y habiéndose opuesto por la demandada diversas excepciones, se analizará cada una de ellas separadamente, principiando por la prescripción.



I. EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA:

SEXTO: Que, corresponde que esta Juez se pronuncie sobre la excepción de prescripción extintiva fundada en el artículo 2332 del Código Civil.

SÉPTIMO: Que, para ello, resulta indispensable señalar que la prescripción extintiva constituye un principio general de Derecho, que adquiere presencia plasmándose positivamente en todos los espectros de los distintos ordenamientos jurídicos, resultando excluida, sólo en aquellos casos en que por ley o atendida la naturaleza de la materia se establece la imprescriptibilidad de las acciones.

Ahora bien, de no considerarse así, la regla general es que no existiría la seguridad jurídica y por tanto, determinados actos se mantendrían indefinidamente en el tiempo en una suerte de incertidumbre que sólo generaría una inestabilidad indefinida en las relaciones jurídicas de todo tipo y no permitiría dar por limitado el ejercicio de la acción indemnizatoria, lo que resulta contrario a toda lógica y hermenéutica jurídica, incluido este tipo de reparación.

OCTAVO: Que, para efectos de corroborar la tesis señalada precedentemente, se encuentra lo dispuesto por el artículo 2497 del Código Civil, el cual señala que las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado; adicionalmente, existen innumerables preceptos de este Código que hacen mención al Estado en el orden patrimonial, y sólo por hacer referencia algunos de ellos, se encuentran los artículos 547 inciso segundo, 983, 995, 1250, 1579, 2472 N° 9, 2481 N° 1, 2497 y 2591, no siendo ninguna de estas normas, objeto de cuestionamientos doctrinarios ni jurisprudenciales.

NOVENO: Que en lo que se refiere a la responsabilidad del Estado a la luz del Derecho Internacional, cabe hacer presente que si bien existen instrumentos internacionales ratificados por Chile que consagran la imprescriptibilidad de los crímenes e infracciones graves en contra de las personas –por ejemplo, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de Prisioneros de Guerra, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad- en ellos se consagra únicamente la imprescriptibilidad de la acción penal, mas no de la acción civil que, como se viene razonando, se encuentra regulada en Chile por el Título XXXV del Libro IV del Código Civil.

De esta manera, la Convención de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra –que prohíbe a las partes contratantes exonerarse a sí



mismas de las responsabilidades incurridas por ellas, por infracciones graves que se cometan en contra de las personas y bienes protegidos por el convenio- a que alude el artículo 131, debe entenderse necesariamente **referida a infracciones del orden penal**, lo que resulta claro de la lectura de los artículos 129 y 130 de dicho Convenio que alude a actos contra las personas o bienes citando al efecto, homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, el causar, de propósito, grandes sufrimientos o atentar gravemente a la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga o privarle de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente a tenor de las prescripciones del Convenio.

Del mismo modo, la supuesta vulneración de la Convención Americana, tampoco ocurre, pues no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por la demandante. Además, debe tenerse en consideración que dicho ordenamiento **fue promulgado mediante Decreto Supremo N° 873 y publicado en el Diario oficial el 5 de enero de 1991, es decir, después de los hechos que motivan este juicio.**

Por lo demás, los artículos citados por los actores sólo consagran un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esta Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna e impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido. **En consecuencia, es evidente que ninguno de los preceptos citados impide aplicar el derecho propio de cada país.**

DÉCIMO: Que así lo ha establecido además nuestra Excma. Corte Suprema en numerosos fallos, emitiendo, en pleno, un pronunciamiento en el aspecto civil de causas sobre indemnización por violaciones a los derechos humanos, quienes en su voto mayoritario establecieron **que la Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por los recurrentes.** Además, ninguna de las disposiciones citadas en el recurso excluye respecto de la materia en controversia la aplicación del derecho nacional.

Además, la misma jurisprudencia, sostiene que, finalmente, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, así como de los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto antes indicado, **se refiere también y únicamente a la acción penal.** En efecto, en el artículo IV establece que los



Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes antes indicados.

Con la sola salvedad del plazo desde el cual empieza a correr la prescripción, el que debe contarse desde que la víctima tuvo la certeza del ilícito perpetrado y no desde la fecha de las detenciones, estimándose que este hecho se produjo con la publicación del Informe de la Comisión Presidencial y Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, en el año 2004.

DÉCIMO PRIMERO: Que por tanto, al haberse ejercido en el caso sublite una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, no cabe sino aplicar en materia de prescripción las normas del Código Civil, lo que por lo demás no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece al ámbito patrimonial.

DÉCIMO SEGUNDO: Que concluyendo en esta materia, no existe norma expresa ni en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como tampoco una norma interna que se encuentre comprendida en nuestro ordenamiento jurídico que haga imprescriptibles los efectos patrimoniales de los delitos declarados imprescriptibles por nuestro ordenamiento; así, no resulta pertinente aplicar por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, lo cual implicaría apartarse del claro mandato de la Ley y principios fundamentales de la institución de la prescripción, tales como, la certeza jurídica, que resulta transversal a todas las ramas del derecho, constituyendo de esta manera cualquier argumentación contraria sólo una ficción legal, que atenta contra la finalidad indiscutible que tiene este tipo de indemnizaciones, las cuales incuestionablemente son de carácter patrimonial **y, por ende, prescriptibles.**

DÉCIMO TERCERO: Que, en la especie, la acción intentada en el presente juicio es de claro contenido patrimonial, ya que a través de ella persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, solicitando los demandantes la suma de \$540.000.000 o aquella que esta sentenciadora, estime pertinente, por concepto de daño moral.

DÉCIMO CUARTO: Que así las cosas, y no existiendo norma alguna que en el ámbito civil se refiere a la imprescriptibilidad de estas acciones, no cabe sino aplicar las normas de derecho interno que rigen las acciones



patrimoniales y que establecen la prescripción; la cual, en el caso de marras es de 4 años, en conformidad a lo previsto por el artículo 2332 del Código Civil.

DÉCIMO QUINTO: Dicho lapso deberá computarse, de acuerdo a lo sostenido por la Excma. Corte Suprema, desde la publicación del Informe de la Comisión Presidencial y Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, en el año 2004; y, habiéndose notificado la presente demanda con fecha 28 de Diciembre de 2018, se observa que se encuentra vencido largamente el plazo de prescripción de la acción respectiva, haciendo imperativo, por tanto, acoger la excepción de prescripción extintiva interpuesta por el demandado Fisco de Chile.

II. EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PAGO:

DÉCIMO SEXTO: Que, conforme indicó la demandada Fiscal en su contestación, se opone la excepción de reparación satisfactiva, para lo cual identifica las prestaciones en dinero y otros medios de compensación destinados a reparar a las víctimas. Expone que la reparación tiene un carácter sumamente complejo, expresando que existen mecanismos de compensación propios de nuestro derecho interno y otros emanados de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, si bien, el debate sobre la compatibilidad de las indemnizaciones otorgadas en sede jurisdiccional con las políticas reparatorias del estado chileno no resulta una cuestión pacífica en nuestro ordenamiento, se hace presente que, sobre el particular, se han pronunciado nuestros Tribunales Superiores, señalando que, independiente de la compatibilidad o incompatibilidad de las prestaciones o indemnizaciones otorgadas para las víctimas de vulneraciones a los derechos humanos, las normas del pago resultan absolutamente inaplicables a la controversia sub lite.

DÉCIMO OCTAVO: Que es indispensable, para efectos de aclarar el particular, establecer que el pago es un acto jurídico y, en cuanto tal, debe reunir los requisitos de éstos; dentro de ellos destaca el objeto que debe contener todo acto jurídico. Así, la determinación del monto de la demanda, en cuanto a la extensión del daño moral, ha dependido enteramente de la voluntad de quienes sostuvieron el libelo pretensor, de modo que no ha mediado una convención, u otra circunstancia, que permita determinar lo que se debe. En este sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago, ha resuelto que tratándose de medidas de reparaciones por violaciones a los derechos humanos, éstas no se condicen con el diseño normativo y los presupuestos legales del derecho privado; y, toda vez que pertenecen a ámbitos jurídicos



diversos, las normas que regulan el pago resultan del todo inaplicables al presente caso.

DÉCIMO NOVENO: Que, pese a lo indicado en el considerando precedente, esta Juez concuerda con la doctrina de la Excma. Corte Suprema que señala la improcedencia de indemnizar, en ésta sede, los daños producto de hechos antijurídicos del Estado, cuando éste ha principiado las reparaciones por una vía diversa. En este sentido, las acciones reparatorias emprendidas por el Estado, pese a la improcedencia de aplicar las normas sobre el pago, impiden estimar como daños no reparados aquellos descritos por la demandante en su libelo.

VIGÉSIMO: Que ha quedado acreditado de acuerdo a la prueba allegada al tribunal, que la madre de la víctima, en tanto beneficiaria por la muerte del último, ha percibido a Enero de 2019, una pensión acumulada de **\$97.974.512**, sumado a una pensión **mensual de \$518.559**, por lo que resulta a juicio de esta sentenciadora improcedente otorgar la indemnización solicitada, **por haber existido ya una reparación patrimonial**, razón suficiente para acoger la excepción de reparación satisfactiva alegada por la defensa fiscal.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que en concordancia con lo anterior, cabe señalar además, lo establecido en el mensaje de la Ley N° 19.123, en el que se manifiesta que el objetivo último de esta norma legal, sería reparar el daño patrimonial que afectó a los familiares directos de las víctimas, de todo daño producido por ilícitos que tienen como causa, la violación de derechos humanos cometidos por Agentes del Estado, haciéndolo compatible con pensiones de cualquier carácter, de acuerdo al artículo 24 de esta ley, **delimitación expresa que impide extender por su alcance a otras situaciones no previstas e inconciliables, por tanto, con el daño moral invocado.**

Que, en efecto, esta sentenciadora concuerda con el criterio de los Tribunales Superiores de Justicia al reconocer en las compensaciones entregadas, en especial por las leyes N° 19.992 y N° 20.874, que aquellas compensaron íntegramente los daños patrimoniales y extrapatrimoniales sufridos por las víctimas, atendida la finalidad del beneficio, y especialmente el esfuerzo realizado por el Estado de Chile, que tuvo por intención mediante aquellos, compensar y reconocer su responsabilidad por los hechos ocurridos, razón por la cual se acogerá la excepción interpuesta por la defensa Fiscal.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que los actores han solicitado además que se proceda por parte del Estado de Chile a pedir disculpas públicas por los



perjuicios morales que se le ha causado a ellos, por algún medio de difusión social, escrito o electrónico o el que se determine por el Tribunal.

Que Al respecto cabe señalar, que en su momento con fecha 4 de marzo de 1991, el Primer Mandatario de la Nación, de ese entonces Don Patricio Aylwin, pidió, como presidente de la República y en representación de toda la nación, perdón a los familiares de las víctimas de los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el régimen del general Pinochet.

Aylwin formuló esta petición de perdón en un formal y emotivo discurso en el que presentó el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, declarando solemnemente que la sociedad chilena está en deuda con las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y añadió: "Pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo", situación que este Tribunal estima por cumplida y concluyente en esta materia.

VIGÉSIMO TERCERO: Que las demás alegaciones y defensas han sido interpuestas en forma subsidiaria, por lo que se hace innecesario pronunciarse sobre ellas al haberse acogido las excepciones opuestas de forma principal; no siendo tampoco necesario analizar la restante prueba rendida y en virtud de lo dispuesto por los artículos 170 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Y vistos y además de conformidad, a lo dispuesto en los artículos 1567, 1568, 1698, 2332 y 2492 y siguientes del Código Civil; artículos 144, 160, 170 y 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Ley 19.123 y sus modificaciones, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de personas que señala; Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad; Convenios de Ginebra de 1949; Convención Americana de Derechos Humanos; Constitución Política de la República de Chile y demás normas pertinentes, SE RESUELVE:

I. Que se acoge la excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco de Chile; y en consecuencia, se rechaza en todas sus partes la demanda de indemnización de perjuicios opuesta por los demandantes a folio 1.

II. Que se acoge la excepción de reparación integral opuesta por la demandada Fiscal.



III. Se rechaza también la petición de disculpas públicas por los perjuicios morales causados, en atención a lo señalado en el considerando vigésimo segundo de este fallo.

III. Que cada parte pagará sus costas, por estimarse que han tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° C-39.771-2018.-

**DECTADA POR DOÑA SYLVIA PAPA BELETTI, JUEZ
TITULAR.-**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiséis de Febrero de dos mil veinte .-**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>